



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

INFORME

SOBRE EL ACCESO A DATOS OBRANTES EN EXPEDIENTES JUDICIALES PARA REALIZAR UNA TESIS

I. ANTECEDENTES

Se ha trasladado el 22 de mayo de 2024, a esta Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de abril de 2024, referente a la petición de una jueza de un juzgado de primera instancia, que es competente en los asuntos relativos a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica e internamientos, de utilizar determinados datos de los procedimientos judiciales que conoce, relativos a sexo de la persona que requiere la asistencia, cuantía de la pensión que cobra o si la persona tiene otros medios de vida. Justifica su petición en que siendo profesora de Derecho Civil de una universidad, se halla realizando una tesis sobre las necesidades económicas de la cuarta edad, en particular de las personas dependientes.

La Sala de Gobierno ha emitido informe favorable sobre esta petición teniendo en cuenta que la investigación docente de carácter universitario integra una actividad de interés público conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de septiembre, de Universidades, en relación con el artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos, y al deber de confidencialidad de la solicitante, que debe mantenerse incluso cuando cese en sus funciones. No obstante, la autorización queda condicionada a la anonimización y desagregación de los datos personales extraídos de los procedimientos, y debiendo desarrollarse la actividad fuera de las horas de audiencia.

No obstante, la Sala de Gobierno solicita consulta al respecto puesto que la petición afecta a datos de personales obrantes en los procedimientos judiciales.

II. CONSIDERACIONES

1. Esta Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, ya se ha manifestado recientemente, sobre una cuestión similar en relación con



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

el informe *sobre acceso a grabaciones de actuaciones judiciales orales y resoluciones judiciales escritas con fines docentes universitarios*. También el Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado a través del informe elaborado por su Gabinete Técnico sobre *la conformidad a Derecho sobre la posibilidad de visionar la celebración de juicios desde equipos y sistemas ajenos a la Administración de Justicia*, por lo que en consecuencia se sigue la misma línea.

A) Sobre la base legitimadora habilitante para el acceso solicitado.

2. La cuestión planteada supone el acceso a los expedientes judiciales con fines docentes de investigación para la realización de una tesis, constituye un tratamiento de datos personales que debe cumplir con las exigencias establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personal y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), que en nuestro ordenamiento jurídico adaptó el RGPD en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos. Asimismo, Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de Protección de Datos Personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, ha dado nueva redacción a los arts. 234 y siguientes de la LOPJ, los que resultan también aplicables.

Así, el art. 236 bis.1 de la LOPJ establece que el tratamiento de los datos personales podrá realizarse con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En este sentido, el art. 236 ter de la LOPJ determina en su apartado 1 que el tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales. Todo ello a salvo de lo dispuesto para la jurisdicción penal, pues el apartado 2 del mencionado art. 236 ter de la LOPJ determina que el tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos, diligencias



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

o expedientes de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se registrá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales tratados con fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales (Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo), sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En el mismo orden de cosas, el art. 236 quáter de la LOPJ establece que cuando se proceda al tratamiento con fines no jurisdiccionales se estará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y su normativa de desarrollo.

3. Como punto de partida, debe existir una legitimación que permita dicho tratamiento al amparo de alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6.1 del RGPD, así como cumplir con los principios del artículo 5 de la misma norma.

De hecho, uno de los principios del artículo 5, contemplado en su apartado 1 letra a) se refiere al principio de licitud, de manera que como se ha indicado en el párrafo anterior, todo tratamiento para ser lícito debe contar con una base jurídica, de entre la enumeradas en el artículo 6.1 RGPD, que lo legitime.

4. Además, el principio de limitación de finalidad exige que los datos personales sean tratados *"con fines determinados, explícitos y legítimos y no serán tratados de manera incompatible con dichos fines"* (art. 5.1.b RGPD). Asimismo, los datos personales objeto de tratamiento deberán ser *"adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados"*, tal y como establece el principio de minimización (art. 5.1.c RGPD y en el mismo sentido, art. 236 quinquies de la LOPJ). Por otro lado, de acuerdo con los principios de integridad y confidencialidad, los datos personales deberán ser tratados *"de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas"* (art. 5.1.f RGPD).

5. El acceso a los expedientes judiciales de interés para la docencia investigadora está amparado en los casos mencionados por la base jurídica



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

prevista en el artículo 6.1.e RGPD si *"el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento"*.

Para justificar la aplicación de esta base legitimadora, debemos ponerla en relación con el art. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dispone lo siguiente: *"1. La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio. 2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico. d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida"*.

En definitiva, el acceso solicitado con los fines descritos puede considerarse como un tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público.

6. El tratamiento consistente en el acceso a los expedientes judiciales con fines docentes de investigación constituye un tratamiento para un fin no incompatible con el tratamiento original de los datos, esto es, el tratamiento con fines jurisdiccionales.

El uso de los expedientes judiciales con fines docentes en el ámbito que nos ocupa es, ciertamente, un fin ulterior y distinto a los fines jurisdiccionales para los que son objeto de tratamiento los datos contenidos en el correspondiente procedimiento judicial, al amparo del artículo 236 ter LOPJ, pero el legislador no excluye esta posibilidad de acceso con la finalidad de investigación.

7. No obstante, este acceso, conforme al principio de limitación de la finalidad del artículo 5.1.b del RGPD, se debe realizar para la finalidad descrita, de manera que su uso para otra podría constituir una vulneración de la normativa de protección de datos.

B) Sobre la aplicación del principio de minimización de datos en el acceso a las grabaciones y resoluciones judiciales.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

8. No obstante lo anterior, y de conformidad con el principio de minimización de datos del artículo 5.1.c del RGPD, se deberán pseudoanonimizar todos aquellos datos personales contenidos en las resoluciones o demás documentos judiciales que permitan directamente o faciliten la identificación de las personas, dado que para la finalidad docente no resulta necesario acceder a los mismos.

Esta previsión viene recogida también en el art. 235 de la LOPJ en su redacción dada por la LO 7/2021, de 26 de mayo, que viene a decir: *"El acceso a las resoluciones judiciales, o a determinados extremos de las mismas, o a otras actuaciones procesales, por quienes no son parte en el procedimiento y acrediten un interés legítimo y directo, podrá llevarse a cabo previa disociación, anonimización u otra medida de protección de los datos de carácter personal que las mismos contuvieren y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda."*

Por tanto, y como bien se refleja en el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el acceso a los datos solicitados debe realizarse de forma pseudoanonimizada, tomando las medidas necesarias para evitar la identificación de los afectados.

9. En relación con el alcance de la pseudoanonimización, cabe distinguir entre los datos personales que conciernen a Jueces y Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores y los datos personales de las partes y resto de personas intervinientes en el proceso.

Respecto de los primeros, debe señalarse, por un lado, que los jueces y magistrados a los que queda limitado el ejercicio de la potestad jurisdiccional (artículo 117 CE y 298 LOPJ) tienen la consideración de autoridad pública, debiendo constar en las sentencias y autos *«el Tribunal que las dicte, con expresión del Juez o Magistrados que lo integren y su firma e indicación del nombre del ponente, cuando el Tribunal sea colegiado»* (artículo 208.3 LEC, en relación con el artículo 248 de la LOPJ), por tanto cabe mantener esos datos personales en las resoluciones judiciales que integren el expediente judicial al que se accede con fines docentes.

Por otro lado, en relación con los abogados y procuradores, por razón de la esencial colaboración de estos profesionales del Derecho en el ejercicio de la función pública de la Administración de Justicia, la AEPD ha considerado



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

lícito mantener los datos personales de estos profesionales en las sentencias incorporadas a los repertorios de jurisprudencia (Informe 434/2006), por lo que cabe mantener el mismo criterio en relación con el uso con fines docentes de los expedientes judiciales.

En definitiva, la seudoanonimización de los datos personales debe ser aplicada a los datos personales de las partes y resto de personas intervinientes en el proceso, procediendo a eliminar los mismos a través de las herramientas correspondientes.

13. En consecuencia, la solicitante se ha de comprometer a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo establecido en la LOPDGDD y disposiciones de desarrollo, así como el RGPD y demás normativa vigente, así como a tratar confidencialmente los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada por motivo de la actividad docente, a no divulgar la misma a ninguna persona ni entidad, y con la condición de que también mantener la confidencialidad, que seguirá vigente incluso después de la finalización de la actividad.

En este sentido, debería presentar y firmar un documento de confidencialidad, comprometiéndose a cumplir lo descrito, y con advertencia de las consecuencias en caso de incumplimiento de la normativa de protección de datos personales.

c) Publicidad.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el art. 232.3 de la LOPJ, ya que por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones, por lo que habrán de excluirse los expedientes cuyas vistas se hayan celebrado a puerta cerrada o con restricciones de publicidad conforme a lo establecido en las leyes procesales (arts. 138.2 y 754 de la LEC, en relación a los procesos en general y a los procesos civiles sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores, respectivamente; y 681 y 682 de la LECrim en el proceso penal).

Con relación a los procesos penales, y a la vista de estos dos últimos preceptos, queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad o víctimas



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

con discapacidad necesitadas de especial protección, y de las víctimas de los delitos de violencia sexual, así como de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, y aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.

Asimismo, queda prohibida la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares.

Finalmente, el Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, podrá restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en las sesiones del juicio y prohibir que se graben todas o alguna de las audiencias cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones y los derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes, especialmente el derecho a la intimidad de las víctimas, el respeto debido a la misma o a su familia, o la necesidad de evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso.

A estos efectos, podrá: a) Prohibir que se grabe el sonido o la imagen en la práctica de determinadas pruebas, o determinar qué diligencias o actuaciones pueden ser grabadas y difundidas. b) Prohibir que se tomen y difundan imágenes de alguna o algunas de las personas que en él intervengan. c) Prohibir que se facilite la identidad de las víctimas, de los testigos o peritos o de cualquier otra persona que intervenga en el juicio.

A mayor abundamiento, han de tenerse en cuenta las previsiones de los arts. 707 y 449 ter de la LECrim referentes a menores de catorce años y personas con discapacidad necesitadas de especial protección, y lo dispuesto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y Peritos en causas criminales.

En cualquier caso, la decisión de restringir la publicidad de las actuaciones, perteneciente al primer tratamiento de datos con fines puramente jurisdiccionales, sobre el que el Juez o Tribunal ostenta independencia a la hora de decidir conforme al art. 12 de la LOPJ, todo ello sin perjuicio de que su decisión afecte a la imposibilidad de continuar con el segundo tratamiento de datos.

CONCLUSIONES



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

PRIMERA.- El acceso a los expedientes judiciales de interés para la docencia investigadora está amparado en los casos mencionados por la base jurídica prevista en el artículo 6.1.e RGPD y 8.2 de la LPDGDD, pues el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público.

SEGUNDA.- La finalidad docente constituye una finalidad ulterior y distinta a los fines jurisdiccionales que justifican el tratamiento original del expediente judicial, pero se trata de una finalidad compatible (art. 5.1.b y 6.4 del RGPD).

TERCERA.- Se estima oportuno la seudoanonimización de aquellos datos personales contenidos en los expedientes judiciales que permitan directamente o faciliten la identificación de las personas, de conformidad con el principio de minimización (art. 5.1c) del RGPD).

CUARTA.- La solicitante debe presentar un documento de confidencialidad en los términos descritos en el apartado 13, dando traslado del mismo a efectos de conocimiento a esa Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

QUINTA.- Todo lo anterior se dice sin perjuicio de lo establecido en el art. 232.3 de la LOPJ, ya que por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones.